



SUMARIO

DISPOSICIONES GENERALES

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

- 81.-** Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 10 de julio de 2020, por el que se establece el protocolo para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos. **Pag 1038**
- 82.-** Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 10 de julio de 2020, por el que se procede a suspender la procesión de la Virgen del Carmen y todos los actos administrativo, salvo los actos de Culto en su Honor que se celebren en su Capilla o en la Iglesia de África. **Pag 1040**

AUTORIDADES Y PERSONAL

- 79.-** Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de julio de 2020, relativo a la eliminación de funciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y a las nuevas funciones de la Dirección General de Hacienda y Presupuestos. **Pag 1041**
- 80.-** Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 10 de julio de 2020, por el que se nombra a D. Rafael Alarcón Oliva como Director General de Recursos Humanos y Función Pública. **Pag 1041**

DISPOSICIONES GENERALES**CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA****81.-****ANUNCIO**

DECRETO DEL CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE CEUTA, DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO PARA AQUELLOS CIUDADANOS QUE SEAN CASOS POSITIVOS A COVID-19, ASÍ COMO SUS CONTACTOS ESTRECHOS O SOSPECHOSOS.

Por Decreto Núm. 5596, de fecha 10/07/2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el siguiente DECRETO:

La Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo, pandemia internacional por la crisis sanitaria COVID-19, debido al alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía.

Para evitar la propagación del virus y reducir su incidencia principalmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, al encontrarnos ante una crisis sanitaria de graves repercusiones, se declaró el Estado de Alarma por Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Aún continuando vigente el Estado de Alarma se estableció un Plan de Transición a la Nueva Normalidad, que supuso la superación de las distintas fases por los municipios y el posterior levantamiento del Estado de Alarma. La principal consecuencia de ello es la continuidad de medidas sanitarias preventivas por las autoridades competentes para ello dentro del deber de cautela tanto de ciudadanos como de poderes públicos, y que conlleva la adopción de medidas sanitarias tendentes a la contención del COVID-19 por dichas autoridades.

De acuerdo con el conocimiento disponible, la infección por SARS-CoV-2 supone un riesgo excepcional para la salud pública, dada su capacidad de rápida transmisión en la población, sobre todo por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los objetos contaminados, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.

La forma más eficaz de controlar la transmisión es la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19, identificar lo antes posible a todos los casos con infección activa para establecer medidas de aislamiento, identificando a los contactos estrechos de los casos confirmados para realizar un diagnóstico precoz e interrumpir las cadenas de transmisión.

De conformidad con los protocolos dictados por el Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y es fundamental asegurar que las medidas de aislamiento de los casos positivos a COVID-19, y sus contactos se realicen de la forma más rápida posible y correctamente, para así evitar esta diseminación de la infección.

La trascendencia de estas medidas obliga a prever situaciones de incumplimiento que podrían obligar a recurrir a medidas de aislamiento obligatorio si fuera preciso por distintos aspectos como pueden ser las dificultades de idioma, por las características de la vivienda, problemas socio-económicos entre otros. Existe la posibilidad de que estos aislamientos de casos COVID-19, por algún motivo social o personal no puedan realizarlo de manera efectiva en su domicilio, debiéndose prever la activación de recursos para dicho alojamiento y aislamiento.

Como se ha demostrado en otras enfermedades infecciosas que requieren aislamiento domiciliario o institucionalizado, pueden plantearse dificultades para su cumplimiento efectivo que pueden estar relacionadas con problemas de comprensión de la importancia para la salud pública e individual. Las circunstancias pueden ser variables, bien porque haya personas que se nieguen a realizar el aislamiento o que lo hayan abandonado, o bien porque rehúyan el contacto con los servicios sanitarios y, por tanto, están exponiendo a su entorno a riesgos de transmisión de la infección.

La Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, por su carácter de ley orgánica, está dotada de rango jerárquico superior a una ley ordinaria, y resulta suficiente para la aplicación del aislamiento domiciliario por las autoridades sanitarias con competencia en materia de salud pública de manera directa, siempre que se den los supuestos de hecho que la norma prevé. Es decir, la medida sanitaria debe ser proporcional para garantizar la finalidad que se pretende, que no es otra que evitar el grave riesgo de salud pública por el alto poder de contagio del virus y, además al suponer restricción o privación de un derecho fundamental, debe ratificarse por el orden jurisdiccional.

Por lo tanto en la norma queda clara la capacidad de adopción de medidas extraordinarias por parte de la autoridad sanitaria competente, en este caso la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad como las actuales y realizar las acciones preventivas que correspondan. También se desprende de la normativa la exigencia de que las medidas sanitarias que se puedan adoptar sean proporcionadas a los fines perseguidos, se limiten al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis y se realicen bajo el control de los órganos jurisdiccionales a los que se les encomienda la tutela de los derechos fundamentales.

Consta informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica fechado y firmado digitalmente.

La Constitución Española cuyo artículo 43. 2 encomienda a los poderes público el deber de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita a las Autoridades Sanitarias a la adopción de las medidas necesarias cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad y realizar las acciones preventivas generales. Se contempla en el artículo 1 que : “las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. Su artículo 2 dispone que: “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por su parte, el artículo 3 de la citada Ley Orgánica establece que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las que estén o hayan estado en contacto con las mismas y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Ley 29/1998, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuyo artículo 8 apartado 6 le atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, “la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”. Por lo tanto, será el Juez del contencioso-administrativo, mediante la autorización previa o la ratificación, quien controle la proporcionalidad de cualquier medida sanitaria que se pretenda poner en práctica, en cuanto tal medida lleve consigo la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, actuando así como garante de los derechos fundamentales del individuo.

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 26 dispone que: "1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas.

2.-La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó". Por Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, publicado en boletín extraordinario nº 53, se establecen las medidas de prevención y contención de la COVID-19 en la Nueva Normalidad, y tras el levantamiento del Estado de Alarma por el Gobierno de la Nación.

Por último y en relación al ámbito competencial es el Real Decreto 32/1999, de 15 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de sanidad, por el que se lleva a cabo el traspaso de la competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta.

Por Decreto de la Presidencia, de 2 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, Extraordinario 19, de 3 de marzo) se atribuye a la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación competencias en materia de salud pública y vigilancia epidemiológica.

En uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 2 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta extr. 19, de 3 de marzo de 2020), en materia Salud Pública e Higiene.

HE RESUELTO:

PRIMERO.- De conformidad con el informe de la Jefa de Servicio de Vigilancia Epidemiológica procede dictar Decreto y publicar en el BOCCE , en el siguiente sentido: Aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos o sospechosos deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante al menos 14 días desde el momento en que tengan conocimiento de ello por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad y hasta tanto sea levantado el aislamiento por la autoridad sanitaria.

SEGUNDO.- La notificación formal, remisión de correo electrónico o llamada telefónica por agentes de salud de la Consejería supone el inicio del aislamiento domiciliario forzoso así como de las normas enviadas y que suponen la imposibilidad de salir de su domicilio ni de entrada de ninguna persona, salvo los servicios de asistencia sanitaria.

TERCERO.- La medida sanitaria será levantada por la misma autoridad sanitaria que la adoptó cuando se produzca una modificación de las circunstancias, la obtención de un resultado negativo a COVID-19 o cualquier otra que permita dicho levantamiento por la autoridad sanitaria.

CUARTO.- Simultáneamente a la adopción de la medida de aislamiento domiciliario forzoso, el expediente se trasladará a los Juzgados Contencioso – Administrativos de Ceuta, en los casos de incumplimiento probado, para su ratificación al tratarse de una medida de privación de derechos fundamentales., a través del servicio competente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

QUINTO.- El incumplimiento de la medida sanitaria preventiva de aislamiento domiciliario supondrá la posible comisión de un delito/falta contra la salud pública o de cualquier otro tipo, siendo trasladado el expediente al orden jurisdiccional competente por los Servicios Jurídicos de la Ciudad, teniendo en cuenta el grave riesgo para la salud pública por el alto poder de contagio del COVID-19.

SEXTO.- Todas las medidas serán objeto de traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su ejecución así como para el auxilio a la autoridad sanitaria.

SEPTIMO .- Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación del decreto, todo ello sin perjuicio de que pueda, en su caso, interponer cualquier otro que estime procedente.

En Ceuta, firmado electrónicamente.

FRANCISCO JAVIER GUERRERO GALLEGO
CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y GOBIERNO
FECHA 13/07/2020

82.- ANUNCIO

DECRETO DEL CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE CEUTA, DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, POR EL QUE SE PROCEDE A SUSPENDER LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y TODOS LOS ACTOS QUE CONSTAN ESTE ACTO ADMINISTRATIVO, SALVO LOS ACTOS DE CULTO EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN QUE SE CELEBREN EN SU CAPILLA O EN LA IGLESIA DE ÁFRICA.

Por Decreto Núm. 5597, de 10/07/2020 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el siguiente: DECRETO.

El próximo 16 de Julio se celebra la Festividad de la Virgen del Carmen, siendo tradicional en nuestra Ciudad que se lleven a cabo una serie de actos conmemorativos, que se encuentran muy arraigados socialmente entre la población, al ser la Patrona de los marineros, con los que la Ciudad se encuentra muy identificada.

Este año 2020, nos encontramos con una situación sanitaria y social marcada por la crisis internacional que nos afecta, debida a la Pandemia de COVID-19. Gracias a las medidas sanitarias adoptadas y al comportamiento responsable de nuestros ciudadanos, hemos conseguido a día de hoy la contención de la incidencia de la enfermedad en Ceuta; no obstante estamos obligados de prevenir la aparición de nuevos brotes epidemiológicos, que comprometieran la salud de las personas, lo que hace necesario, mientras no sea declarada oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria, la adopción de medidas preventivas para tutelar la Salud Pública.

Consta en el expediente informe del Jefe del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud rubricado el 5 de julio de 2020, que a modo de resumen concluye: “conclusión: La celebración de los actos programados para la Festividad del Día de la Virgen del Carmen, que incluyen procesionar por la Ciudad, se deben suspender dado que su realización conllevan un riesgo para la Salud Pública, al facilitar aglomeraciones de personas tanto en el desfile procesional por las calles de Ceuta, como en el recorrido por la Playa de la Ribera donde se realiza la tradicional bendición de las aguas de la Ciudad, la Oración por los difuntos y el canto de la Salve Marinera, lugar donde los ciudadanos esperan con paciencia la llegada del cortejo, presentando de nuevo un alto riesgo de aglomeración para presenciarlo. Estas situaciones provocarían una gran dificultad para el control del cumplimiento de las medidas necesarias para la protección de la Salud Pública, como son el mantenimiento de la distancia física de seguridad, higiene de manos y demás medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias.

No obstante, los actos de Culto en Honor de la Virgen del Carmen que se celebren en su Capilla o en la Iglesia de África, no representarían un riesgo para la Salud Pública, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones sanitarias publicadas, tanto en el aforo permitido en el lugar de culto como con la distancia de seguridad y las medidas de higiene de manos y de higiene respiratoria”

Por Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuyo artículo 4 establece que: “Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarios para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en este Real Decreto Ley. Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en este real decreto ley.

El BOCCE extraordinario nº53, de 25 de junio de 2020, publica el Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, por el que se establecen medidas para la prevención y contención de la COVID-19 en la Nueva Normalidad. En el punto 3.31 de dicho decreto, Fiestas, verbenas, otros eventos populares y atracciones de feria”, estipula que : “En virtud de poder conseguir una adecuada vigilancia previa sobre la evolución de la epidemia, al no haber finalizado la crisis sanitaria, no se celebrarán fiestas, verbenas y otros eventos populares hasta el 30 de agosto del presente año. No obstante por la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, competente en materia de salud pública (prevención y promoción de la salud) y vigilancia epidemiológica, dictará resolución motivada de la suspensión.

Decretos de la Presidencia, de 2 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, extraordinario 19, de 3 de marzo), por el que se atribuye a la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación competencias en materia prevención y promoción de la salud y vigilancia epidemiológica transferidas por Real Decreto 32/99, de 15 de enero, en materia de sanidad e higiene.

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Procédase a suspender la procesión de la Virgen del Carmen y todos los actos que constan en el informe, salvo los actos de Culto en Honor de la Virgen del Carmen que se celebren en su Capilla o en la Iglesia de África y siempre y cuando se cumplen las prescripciones sanitarias preventivas, para contener la propagación del COVID-19 y el grave riesgo de salud pública para toda la ciudadanía que conlleva su celebración como en años anteriores.

SEGUNDO.- Publíquese en el B.O.C.CE y trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .

TERCERO.- Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) podrá interponer recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 de este mismo texto normativo, ante el mismo órgano que ha dictado resolución en el plazo de un mes o ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al que se recepcionó la notificación, conforme a los arts. 123.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8.2 y 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime oportuno.

En Ceuta, firmado electrónicamente.

FRANCISCO JAVIER GUERRERO GALLEGO
CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO
Y GOBERNACIÓN
FECHA 13/07/2020

AUTORIDADES Y PERSONAL

79.-

ANUNCIO

En sesión de Consejo de Gobierno de fecha 10 de julio fue aprobado el siguiente acuerdo :

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2019 se nombra a D. Juan Manuel de la Torre González, Director General de Hacienda y Presupuestos, encuadrado dentro de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, con el fin de apoyar la gestión de su titular.

La Consejera de Hacienda, Economía y Función pública, considera conveniente modificar la actual dependencia del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que incluye el servicio médico, de manera que pase a ser dirigido por la Dirección General de Hacienda y Presupuestos, dependiente de la misma Consejería.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.e) y 25.1 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración, al Consejo de Gobierno se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Eliminar como funciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función pública la siguiente: La planificación, coordinación y gestión, en su caso, de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Ciudad de Ceuta, y del servicio médico.

Segundo.- Añadir como funciones de la Dirección General de Hacienda y Presupuestos la siguiente: La planificación, coordinación y gestión, en su caso, de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Ciudad de Ceuta, y del servicio médico.

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad.

KISSY CHANDIRAMANI RAMESH
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
FECHA 13/07/2020

80.-

ANUNCIO

En sesión de Consejo de Gobierno de fecha 10 de julio fue aprobado el siguiente acuerdo :

Por acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2019 se crea la Dirección General de Recursos Humanos y Administración pública, encuadrada dentro de la entonces Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Posteriormente, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2020, se aprobó una nueva estructura del Gobierno y administración de manera que por acuerdo de 24 de abril del mismo año se cambió la denominación de la mencionada Dirección General, pasando a denominarse Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, dependiente de la ahora Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de julio se cesa al titular de la Dirección General de Recursos Humanos y

Función Pública, quedando ésta vacante.

Se considera conveniente el nombramiento de un Director General de Recursos Humanos y Función Pública, encuadrado dentro de la mencionada Consejería y dependiente de la misma, con el fin de apoyar la gestión de su titular.

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración pública, como eje fundamental de toda Administración, necesita de un equipo directivo para afrontar los retos que las competencias asignadas conllevan. La dimensión de la Consejería requiere de un apoyo para la consecución de los objetivos del Gobierno, que redunden en lograr una mayor eficacia y eficiencia de la gestión de los servicios. Actualmente la Dirección General de Recursos humanos y Función pública tiene asignadas las siguientes funciones, sin perjuicio de las atribuciones previstas en el artículo 26 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración:

- a) La programación y coordinación de la política de la Ciudad de Ceuta en materia de personal, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Gobierno y a la Consejería de Hacienda, Economía y Función pública.
- b) La elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Función Pública.
- c) La gestión administrativa necesaria para la adecuada coordinación con los órganos competentes de las otras Administraciones en materia de personal en todo lo que no esté atribuido a otros órganos.
- d) Las relaciones con las organizaciones sindicales que representen al personal al servicio del sector público de la Ciudad de Ceuta, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, y la coordinación de los procesos de elección de órganos de representación del personal.
- e) La gestión administrativa necesaria en los procesos de selección de personal y la adjudicación de los puestos objeto de provisión.
- f) La elaboración de la Oferta de Empleo Público, la convocatoria y gestión de los procesos selectivos para el ingreso como funcionario de carrera y personal laboral fijo, así como la gestión de las bolsas de personal laboral para contrataciones de carácter temporal.
- g) La gestión de los concursos de traslado de personal, así como la autorización de traslados por causas organizativas y de salud laboral o comisiones de servicios.
- h) El ejercicio de la inspección de servicios en materia de personal y la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes incoados en ejecución de la normativa reguladora del régimen de incompatibilidades aplicable al personal al servicio de la Administración de la Ciudad de Ceuta.
- i) El ejercicio de las funciones de seguimiento en relación con las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial y recursos administrativos.
- j) La gestión y control económico de los recursos humanos de la Ciudad, incluida la gestión de nóminas.
- k) La gestión de la acción social.
- l) La gestión de la Relación de Puestos de Trabajo.
- m) La elaboración, tramitación, aprobación y ejecución de la Formación del personal de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
- n) La coordinación de las políticas de recursos humanos de las entidades públicas dependientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
- o) Gestión del BOCCE.
- p) Todas aquellas que le sean encomendadas por la Consejería de Hacienda, Economía y Función pública o la Presidencia de la Ciudad.

El artículo 23 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta dispone, en su apartado 2, que la creación, modificación o extinción de Direcciones y Subdirecciones Generales, así como el nombramiento de su titular o su cese, se hará mediante Decreto del Consejo de Gobierno, que se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

El artículo 25 del mismo Reglamento señala que los Directores Generales serán nombrados mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero correspondiente, y entre funcionarios de carrera de cualquier Administración Pública que pertenezcan a Cuerpos, Escalas, clases o categorías para cuyo ingreso se exija título superior, salvo que el Decreto de estructura de la Consejería permita que su titular no reúna dicha condición de funcionario, en atención a que las funciones de la Dirección General no se correspondan con las correlativas, en cuanto a preparación, experiencia y cometido, destinadas a los funcionarios. El artículo 26 del mismo texto relaciona las atribuciones que les corresponden a los Directores Generales. En este caso, se propone el nombramiento de un funcionario de carrera en los términos previstos en el artículo 25 citado.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.e) y 25.1 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración, al Consejo de Gobierno se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Nombrar Director General de Recursos Humanos y Función Pública a D. Rafael Alarcón Oliva.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad.

KISSY CHANDIRAMANI RAMESH
CONSEJERO HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

— o —

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Plaza de África s/n - 51001 - CEUTA
Depósito Legal: CE. 1 - 1958
Diseño y Maquetación - Centro Proceso de Datos